

Entre el asistencialismo revolucionario y la socialdemocracia moderna: las políticas sociales de los gobiernos de izquierda en América Latina¹

Luis Reygadas
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (México)

(Paper para el Coloquio *Left turns in Latin America*, University of British Columbia-Simon Fraser University, Vancouver, 25-27 de mayo de 2007).

1. Seis hipótesis sobre las políticas sociales de los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina

Con el fin de promover la discusión, comenzaré este texto con una serie de hipótesis deliberadamente provocadoras, incluso chocantes. Después presentaré la argumentación que sostiene y matiza esas afirmaciones.

Hipótesis 1: En América Latina, los gobiernos de izquierda que están logrando articular las políticas sociales más sólidas y de mayor aliento son aquellos en los que el ascenso electoral de la izquierda se produjo en un marco de continuidad institucional, en contraste con otros gobiernos de izquierda que fueron resultado de crisis de gobernabilidad y rupturas institucionales, en los que se han presentado cambios bruscos de timón y políticas más radicales. Sin embargo, en ambos casos los resultados en el combate a la desigualdad son modestos e inciertos.

Hipótesis 2: Como tendencia general, los vuelcos más significativos hacia la izquierda no se dieron en aquellos países en donde se aplicaron con mayor alcance o durante más tiempo las políticas de ajuste estructural, sino en aquellos en los que dichas políticas se aplicaron de manera más errática o sólo muy intensamente durante períodos cortos.

Hipótesis 3: Paradójicamente, en algunos de los países en los que sus gobernantes han desplegado una retórica más radical y revolucionaria, las políticas sociales han tenido rasgos populistas, incluso asistencialistas. El talón de Aquiles de muchas de las políticas sociales que están impulsando los nuevos gobiernos de izquierda en la región es la persistencia de dispositivos clientelares.

Hipótesis 4: El avance hacia políticas sociales más incluyentes no parece estar relacionado con la fuerza o la combatividad de los movimientos sociales, sino con la capacidad de los movimientos sociales para transformar las dinámicas institucionales (o, visto desde otro ángulo, con la capacidad de las instituciones gubernamentales para innovarse mediante la inclusión de la participación y las agendas de los actores sociales movilizados).

¹ El autor agradece la colaboración de Virginia Sánchez Machuca en la recopilación y selección del material utilizado para elaborar este texto.

Hipótesis 5: La mayoría de los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina están combatiendo las formas más tradicionales de la desigualdad social (asimetrías en la distribución del ingreso y en el acceso a la tierra y otros recursos naturales), pero han avanzado menos en atacar nuevas formas de desigualdad que caracterizan a la economía de servicios y la sociedad del conocimiento (por ejemplo las desigualdades educativas, la desigualdad en el empleo, la brecha digital y el acceso diferencial a los recursos financieros).

Hipótesis 6: la viabilidad a mediano y largo plazo de las políticas sociales de los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina depende de sus avances en torno a cuatro ejes que, por cierto, pueden ser compartidos por el centro y por algunos sectores de la derecha: 1) la consolidación de la democracia, 2) la sustentabilidad económica de las políticas sociales, 3) el fortalecimiento de las instituciones, y 4) la construcción de un amplio pacto político y social.

2. Un enfoque institucional para explicar la diversidad de los gobiernos de izquierda en América Latina.

Este texto analiza la diversidad y los retos de las políticas sociales que han emprendido los gobiernos de izquierda en América Latina durante los primeros años del siglo XXI. La mayoría de los estudios sobre el tema se han centrado en el debate sobre las orientaciones ideológico-políticas de los gobernantes de izquierda, a partir de distinciones del tipo izquierda-centro izquierda, presidentes populistas-presidentes democráticos, izquierda revolucionaria-izquierda reformista o gobernantes tradicionales-gobernantes modernos. Si bien estas distinciones son importantes, no logran explicar la complejidad de los procesos de construcción de alternativas de política social. Además, conducen con facilidad a la diferenciación entre izquierdas “buenas” y “malas”, de acuerdo con las preferencias de cada analista, dentro de una “lucha discursiva por las clasificaciones” (Bourdieu, 1999; Rodríguez Garavito, 2005), lucha a la que no son ajenos otros actores (medios de comunicación, partidos, gobiernos, movimientos sociales, etc.). En el peor de los casos, la discusión se estanca en torno a las características personales de algunos gobernantes, en particular los más pintorescos: Hugo Chávez, Evo Morales y Lula. Para tratar de superar estas limitaciones, propongo tomar en consideración otras variables, hay que pasar de la caracterización de los presidentes al análisis de los procesos sociales que inciden en la llegada de la izquierda al poder y en el desarrollo de sus políticas.

Para ello, es necesario distinguir entre gobiernos de izquierda que surgen como resultado de una profunda descomposición de las fuerzas políticas tradicionales y aquellos otros que operan en contextos de cierta continuidad institucional, situaciones ambas que inciden fuertemente en las características y las limitaciones de las políticas adoptadas. La

llegada de la izquierda al gobierno, en un lapso muy breve, en varios países de América Latina (Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, además de avances significativos de la izquierda en México, Perú y, en menor medida, en Colombia) ha hecho pensar que se trata de un mismo fenómeno continental. Sin embargo, si se analiza cada país se verá que se trata de procesos muy diferentes, aunque todos tengan como telón de fondo el deterioro de la hegemonía de los Estados Unidos en la región y, sobre todo, la insatisfacción con las políticas de corte neoliberal, que tuvieron resultados muy precarios, si no es que francamente negativos, en materia de crecimiento económico, incremento del empleo, disminución de la pobreza, cohesión social y reducción de las desigualdades. Puede ser útil distinguir entre aquellos países en los que el avance de la izquierda se produjo después de un colapso de las fuerzas políticas tradicionales y aquellos otros en los que el giro electoral hacia la izquierda ocurrió en un contexto de mayor continuidad institucional. En el primer grupo de países se puede ubicar a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, mientras que en el segundo se encuentran Chile, Brasil y Uruguay. Por su parte, Argentina y México se pueden ubicar en una situación intermedia al respecto.

2.1 Crisis de gobernabilidad e irrupción de la izquierda: Venezuela, Bolivia, Ecuador, y Nicaragua.

La reorientación de las economías latinoamericanas hacia el exterior y la adopción de políticas neoliberales crearon una serie de tensiones sociales y políticas. En algunos países estos procesos desembocaron en una debacle de las principales fuerzas políticas tradicionales, provocando polarización y crisis de gobernabilidad, mismas que facilitaron el ascenso político de *outsiders* y/o líderes carismáticos que aparecían a los ojos de los electores como la única solución posible frente a la fragmentación política. En algunos casos ese tipo de líderes o *outsiders* se orientaban hacia la derecha (Fujimori y Vargas Llosa en Perú, Caldera en Venezuela, Bucaram en Ecuador). En otros casos, procesos similares llevaron al poder a gobernantes de izquierda, como ocurrió en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Venezuela, a pesar de tener un sistema bipartidista altamente institucionalizado, no pudo resistir la declinación de la industria petrolera y fracasaron varios intentos de enfrentar la crisis económica, creándose un vacío político que posibilitó el triunfo electoral de Hugo Chávez, en 1998 (Romero, Pinto y Ferrer, 2005; Roberts, 2003). En Bolivia no se pudieron consolidar las administraciones de orientación neoliberal, que tuvieron que enfrentar protestas sociales cada vez más intensas: la “guerra del agua” en 2000, la “guerra de la coca” en 2002 y las “guerras del gas” en 2003 y 2005 (Arnold y Spedding, 2005; Orellana, 2006). Estas movilizaciones provocaron la caída de los gobiernos de Sánchez de Losada y Carlos Mesa y abrieron la puerta para el triunfo electoral del líder aymara Evo Morales en diciembre de 2005 (Archondo, 2006; Stefanoni, 2006). Ecuador ha sido testigo del movimiento indígena más consolidado de la región. Varios de

los últimos presidentes de este país no han podido terminar su período de gobierno y desde hace más de diez años muchos ecuatorianos han preferido optar por *outsiders* de derecha y de izquierda y en las protestas de abril de 2005 pedían “que se fueran todos los políticos”, en un clamor similar al de Argentina en diciembre de 2001. En las elecciones de 2006, Jaime Correa fue el *outsider* triunfador (Pachano, 2006). En el caso de Nicaragua no triunfó un *outsider*, sino que ganó las elecciones Daniel Ortega, quien ya había gobernado con el sandinismo, pero que también aparece como el hombre fuerte que puede enfrentar el deterioro político en un país azotado por la pobreza, las crisis económicas y los desastres naturales.

Es interesante observar que es precisamente en esos cuatro países, que han vivido crisis institucionales de proporciones mayores, en donde triunfan gobernantes que manifiestan posiciones de izquierda más radicales y anti-imperialistas. Fue Venezuela quien fundó junto con Cuba la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en 2004, a la que se sumaron Bolivia en 2006 y Nicaragua en 2007, y no sería extraño que pronto se adhiriera Ecuador. Otra similitud es que tanto Hugo Chávez como Evo Morales y Jaime Correa se han enfrentado con las instancias tradicionales del poder legislativo y han promovido la re-fundación del poder legislativo mediante congresos constituyentes o medidas de ese tipo, expediente que por cierto fue utilizado por primera vez en la historia reciente de la región por el derechista Alberto Fujimori en Perú.

Los gobiernos de izquierda que han emergido de procesos de descomposición política tienen la posibilidad de ensayar medidas más radicales y apostar por reformas más profundas, ya que tienen menos constreñimientos institucionales. Por ello en política exterior tienden a seguir una política de mayor confrontación con los Estados Unidos y en política económica se inclinan más por medidas de tipo confiscatorio (reforma agraria, expropiación y/o nacionalización de recursos estratégicos como hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, etcétera).

En materia de política social, apoyándose en los beneficios derivados del alto precio del petróleo, Venezuela ha lanzado ambiciosos programas de redistribución de beneficios hacia las zonas más pobres: alfabetización, programas rurales de salud apoyados por miles de médicos cubanos, programas de atención dental, subsidios a alimentos y productos de primera necesidad. Bolivia ha iniciado programas similares, aunque con dos diferencias importantes: no cuenta con la riqueza petrolera y muchas de sus políticas se orientan a la inclusión de la población indígena. Es muy temprano para evaluar las políticas sociales de los nuevos gobiernos de Nicaragua y Ecuador, pero todo indica que intentarán seguir los pasos de Venezuela y Bolivia.

Sin embargo, las rupturas institucionales que se han dado en estos países son un arma de dos filos. Permiten intentar reformas más radicales, pero prevalece la confrontación entre fuerzas políticas y, en el caso de Bolivia y Ecuador, entre regiones. La dificultad para lograr acuerdos y la fragilidad institucional favorecen la discrecionalidad y

la falta de transparencia, además de que es muy fuerte la tentación de imponer en forma autoritaria los puntos de vista del gobierno.

2.2 Transiciones institucionales hacia la izquierda: Chile, Brasil y Uruguay.

En otros países de América Latina, como Chile, Brasil y Uruguay, la aplicación de políticas de ajuste estructural se prolongó durante largos períodos y, si bien provocó contradicciones y tensiones diversas, no desembocó en crisis de gobernabilidad. En Chile el proceso de ajuste estructural comenzó con la dictadura militar, antes que en el resto de la región, y prosiguió después con los gobiernos de la concertación, pudiendo llegar más lejos que en otros países en la modificación de las reglas institucionales y en el incremento de la competitividad (Schamis, 2002). Esto le ha permitido lograr un crecimiento económico sostenido, con lo que ha disminuido sustancialmente la pobreza, probablemente Chile sea el único país de la región que logrará cumplir con las metas del milenio en materia de reducción de la pobreza. Sin embargo, la desigualdad, que aumentó mucho durante la época de la dictadura, no ha disminuido. En Brasil, las políticas de ajuste estructural tuvieron un comienzo más errático y también se produjo lo que Weyland bautizó como “democracia sin equidad”, ya que los gobiernos de Sarney, Collor de Mello y Franco no contribuyeron a la redistribución del ingreso (Weyland, 1996). Sin embargo, las transformaciones institucionales se consolidaron en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, quien logró estabilizar la economía, inició una reforma agraria moderada e introdujo reformas administrativas, reformas educativas y de salud (Knoop, 2003). Si bien tuvo una gestión exitosa, no se tradujo en crecimiento económico ni en mayor equidad. En Uruguay las reformas estructurales fueron más paulatinas y moderadas, las privatizaciones no avanzaron como en el resto de la región: en el referéndum de 1992 fueron rechazadas por 70% de los votantes. A partir de 1999 vivió un profundo estancamiento y el desempleo llegó hasta 20% en los años siguientes, pero la crisis económica no generó una crisis política, sino que se canalizó hacia el terreno electoral y se mantuvo la fuerza de las instituciones democráticas (Zibechi, 2005: 130-131).

En estos tres países la izquierda llegó al poder mediante transiciones más institucionales y ordenadas, con menor grado de ruptura y de polarización entre las fuerzas políticas. En Chile, tanto Ricardo Lagos como Michelle Bachelet alcanzaron el poder en el marco de los gobiernos de la concertación, en la que también participan sectores de centro y de derecha. En Brasil, Lula alcanzó el poder sin ninguna ruptura institucional, con el respaldo de un partido poderoso, después de haber sido candidato en varias elecciones previas. En Uruguay, la izquierda construyó durante tres décadas una hegemonía cultural antes de conseguir la hegemonía política, mediante la confluencia de varias corrientes de izquierda y de centro en un proyecto socialdemócrata; “Las ideas fuerza que encarna el Frente Amplio (Estado social, gobierno honesto, soberanía nacional, justicia social, entre otras), se han convertido en ‘sentido común’ entre los uruguayos al comenzar el siglo XXI”

(Zibechi, 2005: 128-129). Uruguay es el país de América Latina que tiene un mayor porcentaje de la población (34%) que se considera de izquierda (Latinobarómetro, 2006). Así, Tabaré Vázquez llegó al poder en 2004 como resultado de un largo proceso de acumulación de fuerzas de la izquierda, sin que se produjera una crisis política. Estos tres gobiernos han seguido políticas más moderadas, los compromisos y pactos con otras fuerzas políticas y las restricciones que implican instituciones más consolidadas limitan el margen de maniobra para cambios bruscos de dirección. Esto les obliga a cierta continuidad con las políticas de gobiernos anteriores. En particular, en materia de política económica y financiera estos tres gobiernos han mantenido estrategias que no toman mucha distancia con respecto a sus antecesores. En Chile, Lagos y Bachelet continuaron con políticas de apertura económica y libre mercado (Garretón, 2005), en Brasil, al llegar al gobierno Lula abandonó la retórica radical y anti-empresarial y prosiguió con la disciplina fiscal y financiera de su antecesor Fernando Henrique Cardoso (Knoop, 2003), mientras que en Uruguay Tabaré Vázquez ha optado más por una política de concertación que de enfrentamiento (Rosales, 2006). Estos gobernantes de izquierda han sido acusados por sectores más radicales de haber traicionado a la izquierda y de haber continuado con las políticas neoliberales. En política exterior no han seguido una estrategia de confrontación directa con los Estados Unidos y, en el caso de Chile, ha habido buenas relación con ese país.

En términos de política social no han emprendido programas tan ambiciosos como los de Venezuela. El problema de la desigualdad sigue siendo la gran asignatura pendiente, por lo que la necesidad de políticas redistributivas más firmes es uno de los factores que explica el ascenso de la izquierda, pero es una demanda que no han podido cumplir, lo cual está provocando fuertes presiones sobre Bachelet, Lula y Vázquez. No obstante, en estos países se han dado algunos pasos firmes en materia de política social. Aunque no han hecho campañas de alfabetización y salud tan intensivas como las de Venezuela y Bolivia, sus sistemas de educación y salud parecen más sólidos, lo cual puede incrementar el bienestar social a mediano plazo. En Chile, Ricardo Lagos defendió una idea más moderna de equidad, orientada a buscar mayor igualdad en el acceso al conocimiento, mientras que Bachelet ha impulsado medidas para promover mayor equidad de género. Teniendo como base una economía competitiva, una reorientación más decidida hacia la izquierda puede generar en Chile una democracia social sustentable. En Brasil, Lula logró la reforma del sistema de pensiones, reestructuró el programa “Comunidad Solidaria” de su antecesor y lanzó el programa “Hambre Cero”, además de que continuó las políticas de acción afirmativa hacia los negros iniciadas por Cardoso. Una vez reelecto, Lula se ha propuesto avanzar de manera más decidida en la reforma agraria y en la inclusión de los pueblos indígenas. En Uruguay se ha producido un interesante fortalecimiento de los actores sindicales. En suma, en estos tres países no hay medidas sociales espectaculares, las políticas sociales avanzan a un ritmo lento, pero parecen viables, ya que no dependen tanto

de un liderazgo carismático, de excedentes petroleros o de circunstancias favorables en los precios de los productos de exportación.

2.3 Dos casos intermedios: Argentina y México.

Hay dos países en el que el ascenso de la izquierda se produjo en un contexto híbrido entre descomposición del sistema político y transición institucional: Argentina y México. En Argentina los gobiernos de Menem impulsaron el programa de privatización más amplio y agresivo de la región, no exento de corrupción y pactos corporativos (Etchemendi, 2001; Schamis, 2002), además de que su política cambiaria restó competitividad a la industria, de modo que se incrementaron el desempleo y la pobreza. Esto generó mucho descontento pero que no provocó en lo inmediato una debacle política. Fue unos años después, en 2001-2002, al hacer crisis el modelo cambiario, cuando se produjeron intensas movilizaciones, cayeron varios presidentes en unas cuantas semanas y se extendió entre la población el reclamo “¡Qué se vayan todos” (Battistini, 2002). Si bien en esa coyuntura se produjo una crisis política de grandes dimensiones, posteriormente logró estabilizarse el sistema político, en buena medida por la capacidad de las redes peronistas para funcionar como mecanismo de intermediación entre los sectores populares movilizados y el gobierno. Así, el triunfo electoral del peronista de izquierda Néstor Kirchner fue resultado de una combinación entre movilización social, crisis política y reconstitución de las instituciones. En México también se presentó una combinación similar, si bien en este país la izquierda no ha llegado a la presidencia, pero controla varios gobiernos estatales, gobierna en el Distrito Federal desde hace 10 años y en las elecciones de 2006 obtuvo la tercera parte de la votación y perdió la presidencia por sólo 0.5% de los sufragios, en unas elecciones altamente controvertidas. En México la aplicación de programas de ajuste estructural se prolongó durante más de veinte años: iniciaron en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-88), se intensificaron con Salinas de Gortari (1988-94), prosiguieron con Zedillo (1994-2000) e incluso con el panista Fox (2000-2006). Estos programas provocaron varias crisis políticas, que se intensificaron en los períodos de elección presidencial: la reacción contra las políticas de austeridad instrumentadas por De la Madrid creó un descontento social y una fractura del PRI que casi llevan a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia en 1988; después de las reformas de Salinas de Gortari hubo una serie de sacudidas en 1994: el levantamiento del EZLN, el asesinato del candidato presidencial Colosio y crisis financiera (con su efecto “tequila”); en 2000 el PRI perdió la presidencia después de más de 70 años en el poder y en 2006 se produjo una crisis política después de las elecciones en las que López Obrador, candidato de la izquierda, perdió por un margen estrecho y desconoció los resultados y a las instituciones políticas. Sin embargo, después de esta última crisis López Obrador quedó relegado a un movimiento testimonial, mientras su partido sigue gobernando la ciudad de México y convive en el Congreso con las otras fuerzas políticas.

Así, aunque en México y en Argentina se produjeron crisis políticas de gran magnitud, el sistema político ha podido recomponerse, aunque persisten importantes déficits institucionales. Esta situación mixta ha influido en las oscilaciones de la izquierda entre posiciones rupturistas y posiciones más institucionales. En Argentina el gobierno de Kirchner ha mantenido una encendida retórica en contra de los Estados Unidos, las empresas transnacionales y los organismos financieros internacionales, pero no ha descartado el diálogo y logró una negociación ventajosa con el FMI. En política interna no ha seguido una estrategia de ruptura institucional. En política social destaca la ampliación de los programas de apoyo a desempleados, que han beneficiado a millones de jefas y jefes de hogar, aunque no alcanzaron a ser universales y en buena medida han sido capturados por las redes clientelares del peronismo. En México algunos sectores de la izquierda mantienen una posición radical de ruptura con el gobierno, destacadamente el EZLN, algunos movimientos sociales y López Obrador después de su derrota electoral, pero el grueso del PRD se mantiene como fuerza opositora dentro del congreso, al mismo tiempo que gobierna varios estados y municipios. Después de 10 años en el poder en la ciudad de México su política social se ha caracterizado por los apoyos monetarios a sectores desprotegidos (ancianos, madres solteras), la reconstrucción de redes clientelares y, recientemente, por impulsar propuestas liberales como las sociedades conyugales de convivencia, el derecho al aborto y la eutanasia.

Después de revisar los diferentes caminos por los que la izquierda latinoamericana ha llegado al poder, una primera conclusión que salta a la vista es que las diferencias entre las izquierdas se deben menos a las distintas orientaciones ideológico-políticas de los gobernantes y responden más a los diversos contextos y procesos políticos, en donde una variable central es el grado de deterioro o de buen funcionamiento de las principales instituciones políticas. Esto no quiere decir que los antecedentes históricos de cada país determinen totalmente las orientaciones que seguirá un gobierno de izquierda. Son sólo marcos que obstaculizan o propician determinadas estrategias políticas, pero dentro de ellos pueden tomarse opciones muy distintas. Además, puede cambiar el curso de los acontecimientos. Países en donde la izquierda ha representado una continuidad institucional pueden experimentar mayores tensiones y crisis de gobernabilidad si no logran avanzar más rápido en enfrentar la pobreza y la desigualdad; por su parte, gobiernos de izquierda que han seguido estrategias de ruptura pueden generar una nueva institucionalidad que les dé un sustento de largo plazo.

3. Los alcances y los desafíos de las políticas sociales de las izquierdas.

Una vez analizados los distintos orígenes de los gobiernos de izquierda, en esta sección intentaré un primer balance de sus políticas sociales, tomando como base los siguientes ejes: la relación entre movimientos sociales y gobiernos, la coherencia democrática de los

gobiernos, la viabilidad económica de las reformas sociales y la dialéctica entre nuevas y viejas desigualdades.

- Relación entre gobiernos y movimientos sociales. Muchos piensan que los movimientos sociales son los nuevos sujetos transformadores de la historia y por ello, entre más fuertes y combativos sean, mayores serán los alcances de la política social de la izquierda (Borón, 2004; Chilcote, 2003). Pero eso es atribuir a los movimientos toda la responsabilidad de un proceso que es mucho más complejo. El problema está en la relación que se establece entre los nuevos gobiernos y dichos movimientos. Al respecto, Alain Touraine ha dicho: “En eso radica lo esencial: eso es lo que está en juego y ahí está el fracaso. No se ha constituido un lazo entre los movimientos sociales –fundados en los trabajadores, en sectores urbanos o incluso en grupos étnicos- y partidos políticos que acepten colocar claramente las luchas sociales dentro de un marco institucional que podríamos llamar, al menos formalmente, democrático.” (Touraine, 2006: 1). No se trata solamente de que “La ‘izquierda política’ todavía no ha acudido a la cita con una ‘izquierda social’ cada vez más movilizadora” (Borón, 2000), sino que, en una región socialmente polarizada y con democracias frágiles, los movimientos sociales no siempre generan que las instituciones se vuelvan más democráticas e incluyentes, sino que con frecuencia se producen desencuentros entre los movimientos y las instituciones políticas, o cuando se encuentran muchas veces lo hacen mediante lazos clientelares y corporativos (Reygadas *et al.*, 2007).

Las diferencias por país son interesantes. En Venezuela, Hugo Chávez no llegó al poder como resultado de las movilizaciones populares, pero ya en el gobierno ha impulsado, desde arriba, sólidas redes corporativas con los Consejos Comunales, pero con una relación clientelar casi directa entre el presidente y la población, utilizando hábilmente estrategias de comunicación masiva y no tanto estructuras intermedias que puedan limitar su poder. En Argentina, Néstor Kirchner ha podido aprovechar buena parte de la fuerza de los piqueteros y de otros movimientos mediante la reconstitución de mecanismos de intermediación que enlazan a gobiernos locales con los punteros peronistas (Auyero, 2007). En Chile, hasta antes de Bachelet, parecía haber poca comunicación entre los movimientos y los organismos de gobierno. La llegada de la izquierda en Ecuador estuvo precedida de un ciclo de protestas de varios años, aunque no queda claro si estos movimientos serán la base de una reconstrucción democrática del estado ecuatoriano o si el gobierno de Correa dará paso a un corporativismo autoritario fincado en los movimientos sociales leales a su proyecto. En México los gobiernos locales de izquierda tienden a favorecer a movimientos sociales vinculados al PRD, a la vez que ha habido una relación compleja (de simpatía y conflicto) entre ese partido y movimientos sociales más radicales como el del EZLN o los campesinos de Atenco. En este renglón, quizás los casos más prometedores sean los de Brasil, Bolivia y Uruguay. De los actuales presidentes de izquierda en América Latina, sólo Evo Morales y Lula fueron durante muchos años dirigentes de organizaciones y

movimientos sociales, lo que les da un importante capital político frente a ellos, aunque también pueden verse decepcionados por su comportamiento como gobernantes. En el caso de Brasil ha sido tensa la relación del gobierno de Lula con el MST y otras organizaciones sociales, además de que se han presentado lazos clientelares entre el gobierno y algunas organizaciones ligadas al PT. En Bolivia, Evo Morales tiene el respaldo de la mayoría indígena y de diversos movimientos, que son actores políticos de primer orden y han respaldado medidas trascendentales de su gobierno como la nacionalización de hidrocarburos, la reforma agraria y la convocatoria a la asamblea constituyente. En Uruguay, los movimientos sociales contra la ley de impunidad en los años ochenta y contra las privatizaciones en los años noventa han encontrado en el Frente Amplio una expresión política que les permite incidir en la transformación institucional (Zibechi, 2005). En este país la existencia de instituciones democráticas y el fortalecimiento reciente de la autonomía sindical brindan a Tabaré Vázquez la oportunidad de aprovechar la movilización sindical para reconstruir un estado de bienestar maltrecho por las dificultades económicas.

En relación con los movimientos sociales, las políticas sociales de los nuevos gobiernos de izquierda parecen estar atrapados entre dos alternativas poco deseables: por un lado establecer vínculos corporativos y clientelares que favorecerían sólo a algunos sectores y, por el otro, sólo continuar con las políticas compensatorias de los gobiernos neoliberales, ignorando las demandas de los movimientos o enfrentándose con ellos. Entre estos dos extremos, el reto está en mantener la independencia entre gobiernos y movimientos, pero traducir la potencia social creada por éstos últimos en transformaciones de las instituciones de política social, en el sentido de hacerlas más incluyentes y democráticas.

- Coherencia democrática. Si el talón de Aquiles de las políticas sociales de la izquierda es el clientelismo, un elemento decisivo para que los nuevos gobiernos de izquierda hagan una diferencia es su compromiso con la democracia, si es sustantivo o meramente instrumental, si promueven o no mecanismos de democracia participativa, transparencia y rendición de cuentas o reproducen formas de populismo, corporativismo y clientelismo. Aquí el panorama es híbrido. Por ejemplo, el gobierno de Chávez ha promovido la participación popular en diversos ámbitos, le ha dado voz y voto a sectores antes excluidos, pero al mismo tiempo ha tomado medidas discrecionales y ha concentrado el poder en la presidencia, por lo que en términos de democracia su saldo es ambivalente (Gratius, 2006; Roberts, 2003). En Ecuador, la convocatoria a una asamblea constituyente también muestra claroscuros: por un lado busca la renovación democrática del estado, pero se utilizan métodos autoritarios contra legisladores y jueces opositores. Hay que recordar que, según la encuesta de 2006 de Latinobarómetro, Ecuador es, por mucho, el país de la región en el que un mayor porcentaje de la población (39%) dicen que los partidos y el congreso no son necesarios para la democracia (Latinobarómetro, 2006: 62). En Argentina, Néstor Kirchner ha actuado en los marcos de las instituciones democráticas, aunque los programas de

asistencia al desempleo siguen líneas corporativistas sin convertirse en un seguro de desempleo universal, en parte por limitaciones financieras y en parte por sus compromisos con los intermediarios políticos. En México, durante las protestas contra los resultados de las elecciones de 2006, López Obrador logró reunir en las plazas a cientos de miles de personas en asambleas populares, pero con respecto a las instituciones democráticas formales las reconocía cuando le convenía y las denostaba cuando no estaban de acuerdo con él. Pareciera que algunos de los nuevos gobernantes de izquierda heredaron un viejo vicio de esta corriente política: la relación instrumental con la democracia representativa, a veces la promueven y la usan en su favor, pero en otras ocasiones la atacan como “instrumento de dominación de los poderosos” cuando no comparten las decisiones de sus órganos. Sin embargo, otros de los gobernantes de izquierda parecen tener un compromiso más sustantivo con la democracia. Lula en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay han respetado las instituciones democráticas. Es interesante el caso de Bolivia, en donde la convocatoria a la asamblea constituyente fue acompañada por el reconocimiento de las demandas de autonomía regional defendidas por la oposición, lo que ha creado ciertos balances y contrapesos democráticos. Un caso excepcional es el de la izquierda chilena. Desde los años setentas comenzó una intensa reflexión en torno a la derrota de la Unidad Popular y la consolidación de la dictadura de Pinochet, que condujo a un proceso de renovación socialista que llevó a transitar “de la revolución a la democracia”, como lo definió Norbert Lechner (Lechner, 1988). Así, la corriente mayoritaria de los socialistas chilenos asumieron desde los años ochenta un compromiso fuerte con la centralidad de la democracia y con el pluralismo, compromiso que han mantenido hasta la actualidad (Durán Migliardi, 2001).

Es comprensible que en países en donde las instituciones democráticas sufrieron un franco deterioro o fueron capturadas por las elites, los nuevos gobiernos de izquierda recurran, transitoriamente, a dispositivos de democracia directa o a cierta concentración de las decisiones en líderes carismáticos. El dilema estriba en si éstas formas de conducción política dan paso a una normalidad democrática, con instituciones y reglas claras, dotadas de contrapesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, o se convierten en regímenes autoritarios. Mientras que Bolivia parece seguir el primer camino, la evolución reciente de Venezuela y Ecuador parece ir en el sentido de un autoritarismo creciente que restringe los derechos democráticos.

- **Viabilidad económica de las políticas sociales.** Un rasgo distintivo de los gobiernos de izquierda es la puesta en marcha de políticas de redistribución del ingreso en beneficio de los sectores más pobres, lo cual es muy positivo, pero es preciso analizar su sustentabilidad a largo plazo, es decir, si se fundan en reformas fiscales y en políticas eficientes de crecimiento económico. Una de las críticas más frecuentes a los gobiernos de derecha fue que redujeron las políticas sociales a medidas compensatorias y asistencialistas hacia los

más pobres, en lugar de promover instituciones que garantizaran los derechos económicos y sociales de todos los ciudadanos. Sorprendentemente, algunos de los nuevos gobiernos de izquierda han adolecido de limitaciones similares. Un caso muy interesante es el de Venezuela. En los primeros años del gobierno de Chávez la situación económica se complicó, aumentó la inflación y no disminuyó la pobreza. Después, apoyado en los altos precios del petróleo, ha canalizado cuantiosos recursos hacia las zonas rurales y urbanas marginadas. Sin negar las bondades de que una parte importante de la riqueza petrolera se destine a los pobres, los programas sociales tienen dos limitaciones muy serias. Por un lado, no se sustentan en un estado y una economía eficientes, sino en la bonanza petrolera que disfraza la ineficiencia de una administración burocrática, con grandes dosis de corrupción y manejado con criterios de rentabilidad política (Elizondo, 2007). Por otra parte, las políticas sociales parecen seguir una línea muy asistencialista. Esto se refleja no sólo en los nombres de algunos programas, con claros ecos militares y religiosos (“Misiones”, “Operación Milagro”, “Operación Sonrisa”), sino también en los contenidos y las formas de los mismos, ya que aparecen como dádivas que el todopoderoso presidente concede a los pobres, en especial a quienes le son fieles (Gratius, 2006). En México, el discurso de López Obrador en torno a los pobres evolucionó de tal manera que fue visto como un padre protector de los necesitados, como un “Mesías tropical”, en palabras de Enrique Krauze; aunque su proyecto era incluyente, en el campo de la comunicación “En términos emocionales, cristaliza ... una intención de compromiso ‘asistencialista’ en la (propaganda de la izquierda” (Villoro, 2007: 22).

Durante los últimos años, algunos de los gobiernos de izquierda en la región han tenido en su favor el incremento del precio de muchas de las materias primas que exportan, que se reflejó en tasas altas de crecimiento en 2005 y 2006. Argentina también ha tenido un repunte importante después de la profunda crisis que experimentó en los primeros años del milenio. En su primer año en el gobierno, Evo Morales logró que la economía boliviana tuviera su mejor desempeño en 30 años, gracias a los acuerdos en torno a los hidrocarburos, que aumentaron sustancialmente los ingresos del gobierno, además de los altos precios del gas natural y de los minerales (Ibalbarriaga, 2007). Intenta transferir los excedentes generados por la explotación de hidrocarburos hacia la economía familiar y comunitaria, para crear lo que ha denominado “capitalismo andino-amazónico”, orientado hacia los pequeños productores (Stefanoni, 2006). Pieza clave de su estrategia económica ha sido la nacionalización de los hidrocarburos y de la empresa de telecomunicaciones ENTEL, pero en repetidas ocasiones ha insistido que se trata de una “nacionalización responsable que no es expropiación”. Es interesante anotar que el nacionalismo económico de Evo Morales no lo ha conducido a políticas anti-empresariales o anti-mercado, como lo muestra su discurso de investidura presidencial ante el congreso: “He aprendido que el presidente del gobierno tiene que hacer buenos negocios para su país. Por eso es importante discutir, analizar profundamente las políticas comerciales, sea el Área de Libre Comercio de las Américas,

(ALCA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercosur o el Tratado de Libre Comercio (TLC), hay que discutirlos. Si son mercados para los micro y pequeños empresarios, para las empresas comunitarias, asociaciones o cooperativas, si se garantiza en ese mercado, bienvenido, porque se trata de garantizar mercado para los pobres” (citado en Orellana, 2006:1). En Brasil y en Uruguay el crecimiento económico ha sido muy lento. Con excepción de Chile, ninguno de los gobiernos de izquierda en la región ha logrado construir una economía sólida y competitiva que garantice un crecimiento económico sostenido, más allá de la coyuntura favorable de los precios internacionales de las materias primas. Para que sus políticas redistributivas no naufraguen con la próxima caída de los precios de las materias primas, tienen poco tiempo para incrementar la eficiencia de sus economías.

- **Viejas y nuevas desigualdades.** En la región del planeta con mayor desigualdad de ingresos, el énfasis en la igualdad es el eje central que distingue a la izquierda de otras fuerzas políticas. En este campo hay que preguntarse si los gobiernos de izquierda han logrado articular programas coherentes para reducir la desigualdad o sólo han promovido medidas aisladas y de corto plazo. También debe analizarse si únicamente impulsan medidas tradicionales de igualación (redistribución de tierras, de recursos naturales y de apoyos monetarios) o si han comenzado a promover la igualdad en el acceso al conocimiento, la educación, la salud, el empleo, los mercados y las conexiones digitales.

Muchos de los movimientos sociales recientes en la región colocaron como un punto central de la agenda pública el tema de la discriminación hacia los indígenas, los negros, las mujeres y las minorías sexuales. Una de las grandes novedades de los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina es el protagonismo de grupos antes excluidos: indígenas, negros, mujeres, minorías sexuales, obreros, pequeños propietarios y otros sectores populares. La llegada a la presidencia de Evo Morales (indígena aymara), Lula (obrero metalúrgico) y Michelle Bachelet (víctima de la dictadura) representan la punta del iceberg de una profunda transformación política y cultural que podría crear, por primera vez en la historia de la región, las condiciones para la consolidación de regímenes de democracia social, mediante la inclusión de estos sectores sociales.

En una región con grandes carencias sociales es muy lógico que los gobiernos de izquierda se hayan enfocado al combate de las viejas desigualdades. Son de aplaudir los esfuerzos contra la discriminación, las campañas de alfabetización, los apoyos monetarios a los sectores más pobres y vulnerables (desempleados, madres solteras, niños, adultos mayores, etc.), la redistribución de tierras, las campañas de salud en áreas urbanas y rurales marginadas y los subsidios a productos de primera necesidad. Pero, como han mostrado diversos autores (Dubet, 2006; Reygadas, 2007; Saraví, 2006), las carencias históricas se articulan con nuevas formas de desigualdad propias de las sociedades del conocimiento, dando lugar a desigualdades multiplicadas, espirales de desventajas y acumulación histórica

de distintos tipos de desigualdades. Por lo general, los partidos y gobiernos de izquierda en la región no han logrado generar alternativas para enfrentar las desigualdades propias de la nueva fase del capitalismo global: la exclusión del empleo, las disparidades en el acceso a la información, el conocimiento y las nuevas tecnologías, las inequidades en la conexión con los circuitos comerciales y financieros internacionales, la concentración de la propiedad intelectual. Con frecuencia, la imagen de la izquierda aparece como alejada de la era digital (Villoro, 2007: 22). Las viejas armas del nacionalismo económico no parecen ser suficientes para enfrentar esos desafíos. Nuevamente la excepción es la izquierda chilena, que parece estar más preocupada por esas nuevas formas de desigualdad, aunque no ha podido hacer mucho para reducirlas.

4. Conclusión: las vías en disputa.

De lo dicho hasta aquí, puede concluirse que son muy diversos los caminos que están siguiendo las políticas sociales de los gobiernos de izquierda en América Latina. Si tratáramos de ubicarlos en un continuum, se pueden distinguir dos vías muy contrastantes. En un polo, el “asistencialismo revolucionario” de Venezuela, anti-americano, con una retórica radical y confrontacional, caracterizado por transferencias millonarias del excedente petrolero hacia programas sociales, poco preocupado por la eficiencia económica y crecientemente autoritario y clientelar. En el otro, la “concertación democrática” chilena, de corte socialdemócrata, muy institucional, con buenas relaciones con los Estados Unidos de América, preocupado por la disciplina financiera y la eficiencia económica. En medio, muchas variantes híbridas, quizás Ecuador y Nicaragua más cerca de la propuesta venezolana, Brasil y Uruguay con mayores posibilidades de aproximarse a las políticas de la concertación socialdemócrata, mientras que Argentina, Bolivia y México comparten diversas características de ambos modelos. Independientemente de las simpatías o antipatías que cada quien tenga con cada una de las izquierdas, es importante introducir dos matices:

- I. Como señalé en el segundo apartado, las distintas vías que han seguido las izquierdas latinoamericanas no se explican sólo ni principalmente por las divergencias en las ideologías políticas de los líderes y presidentes de la izquierda, sino que son resultado de trayectorias históricas complejas, en las que una variable clave es la magnitud y el tipo de crisis experimentada por las instituciones políticas de cada país. En países, regiones y situaciones de fragilidad y descomposición institucional, es más frecuente que en la izquierda predominen alternativas más radicales, mientras que en contextos de mejor funcionamiento de las instituciones políticas es más probable que la izquierda se incline hacia posiciones social demócratas. Sin embargo, no existe un determinismo absoluto al respecto, es posible que un país con tradiciones democráticas débiles cambie su rumbo, si bajo la conducción de un gobierno de izquierda logra construir un amplio pacto político

y social de orientación socialdemócrata. Más que clasificarla a las izquierdas en “buenas y malas”, “reformistas y revolucionarias” o “democráticas y populistas”, hay que seguir avanzando en la comprensión de los factores que explican los diversos caminos que sigue la izquierda.

- II. Hasta la fecha, ninguna de las vías de política social seguidas por los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina ha logrado una reducción significativa de las desigualdades sociales. Puede hacerse un amplio inventario de los logros y de las limitaciones de los distintos gobiernos, pero aún es muy pronto para asegurar que alguno de ellos haya logrado resolver este problema estructural de las sociedades latinoamericanas. Los adversarios de Hugo Chávez pueden afirmar que es autoritario, que sus políticas no se sustentan en la eficiencia económica sino en los excedentes petroleros o que caen en el asistencialismo, pero no pueden dejar de reconocer que en los últimos años millones de personas en Venezuela se han beneficiado de los programas de alfabetización y apoyo a la salud y la alimentación populares. Los críticos de los gobiernos chilenos de izquierda señalan, con razón, que éstos no se han distanciado mucho de las políticas económicas y sociales de los gobiernos de derecha y de centro, además de que persiste la desigualdad de ingresos, pero también es innegable que en este país la pobreza ha disminuido en forma significativa durante varios años. Probablemente cada una de estas dos vías puede aprender mucho de la otra: a Venezuela le vendrían muy bien la institucionalidad democrática y la eficiencia económica chilenas, mientras que al mirarse en el espejo venezolano la izquierda chilena puede advertir la importancia de tomar medidas más radicales para la inclusión de los pobres. El futuro de estas izquierdas latinoamericanas también depende de su capacidad para aliarse y articularse entre ellas.

Independientemente de la diversas vías seguidas por los gobiernos progresistas de América Latina, es evidente que la izquierda tiene que construir nuevas alternativas de política social, acordes con las circunstancias actuales de la región. Con frecuencia, el mensaje de las políticas sociales de la izquierda se oye así: “En el capitalismo, la mayoría de la población es pobre, tú serás siempre pobre, pero yo estaré ahí para protegerte de las injusticias y para llevarte al socialismo”. Aunque a algunos les haga sentido este discurso “pobrista” y revolucionario, muchos latinoamericanos no reconocen en él sus aspiraciones. Saben que son pobres, pero les gustaría dejar de serlo y disfrutar de las comodidades de la vida moderna, en el capitalismo. El escritor Juan Villoro dice que en las elecciones de 2006 muchos mexicanos, sobre todo jóvenes, no se identificaron con el lema “primero los pobres” de López Obrador y, en cambio, se sintieron atraídos por los mensajes optimistas del candidato de la derecha, por lo que concluye que, para mirar al futuro, la izquierda tiene que “inventar a la clase media”(Villoro, 2007). La encuesta de Latinobarómetro de 2006

señala que la región se ubica en el centro político (5.4 en una escala en la que 0 es izquierda y 10 derecha, en 2006), que en ningún país hay más de 34% de personas que se ubiquen en la izquierda, mientras que en algunos hay hasta 50% de personas que se ubican en la derecha. Incluso en los países que votaron por candidatos de izquierda sólo una minoría de la población se considera de izquierda (Corporación Latinobarómetro, 2006). El análisis de esas encuestas entre 1995 y 2002 reveló que existe una fuerte polarización política: sectores muy numerosos se ubican en el centro (cerca de 5 en la escala) o en la derecha (cerca de 10 en la escala) (Colomer y Escatel, 2005). En muchos países la polarización política tiene expresiones regionales: en México el norte más desarrollado vota más por la derecha, mientras que la izquierda obtiene más votos en los estados pobres del sur; el oriente boliviano se inclina más por la derecha que el altiplano, misma diferenciación que se observa entre el Perú costero y andino, entre las provincias costeras de Ecuador y la región serrana y entre el sur de Brasil y el nordeste.

La persistencia de las desigualdades en América Latina, agudizadas en la época neoliberal, brinda un campo fértil para las políticas sociales de la izquierda, pero también es un enorme desafío. No le falta razón a la izquierda cuando se concentra en la atención de las necesidades de los sectores más pobres de la población, pero es preocupante que en sus programas de gobierno predominen la redistribución de apoyos monetarios y acciones de emergencia en salud y alimentación, que con frecuencia reproducen relaciones clientelares, cuando no francamente asistencialistas. También es preocupante que, frente al endurecimiento de muchas fuerzas de derecha, se fortalezcan autoritarismos revolucionarios de izquierda, ya que ambos agudizan la polarización de la región. Para hacer una diferencia y convertirse en una alternativa viable a mediano y largo plazo, las izquierdas tienen que desarrollar políticas de combate a las desigualdades multiplicadas, construyendo las bases de economías competitivas e instituciones sólidas que garanticen empleos, educación y salud de buena calidad para toda la población. Sólo de esa manera podrán romperse las estructuras que reproducen la acumulación de desigualdades y las espirales de desventajas que han caracterizado a las sociedades latinoamericanas. Para ello es indispensable que la izquierda renueve su discurso y construya amplios pactos sociales que, además de expresar las demandas de los pobres, de los movimientos sociales y de la izquierda, incluyan a las clases medias y al centro, obligando a los empresarios y a la derecha a comprometerse con la democracia social. América Latina necesita una izquierda moderna, democrática y reformista, capaz de impulsar una alternativa post-neoliberal, pero también post-socialista y post-revolucionaria. Post-neoliberal porque recupera el papel central del estado en la construcción de sociedades igualitarias, pero post-socialista y post-revolucionaria porque busca la construcción gradual de la igualdad, reconociendo que en las sociedades contemporáneas los mercados son necesarios y la democracia es un valor fundamental. La necesidad del combate sistemático a la desigualdad es el principal argumento que tiene la izquierda latinoamericana en su favor, pero su éxito dependerá no

sólo de la reforma del sector social, sino también de su capacidad para consolidar la democracia, lograr el crecimiento sostenido de la economía y construir un amplio pacto político y social.

Referencias

- Archondo, Rafael (2006) “Qué le espera a Bolivia con Evo Morales?”, *Nueva Sociedad*, marzo-abril
- Arnold, Dennise y Alison Spedding (2005) *Mujeres en los movimientos sociales en Bolivia 2000-2003*, La Paz: ILCA-CIEM.
- Auyero, Javier (2007) *Routine politics and collective violence in Argentina. The gray zone of State power*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Battistini, Osvaldo (coord.) (2002) *La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada*, Buenos Aires: Asociación Trabajo y Sociedad.
- Borón, Atilio (2000) *Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Borón, Atilio (2004) “La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: nuevas realidades y urgentes desafíos”, *OSAL*, año V, núm. 13, pp. 41-56.
- Bourdieu, Pierre (1998) *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*, Madrid: Taurus.
- Colomer, Josep y Luis Escatel (2005) “La dimensión izquierda-derecha en América Latina”, *Desarrollo Económico*, vol. 45, núm. 177, pp. 123-136.
- Dubet, François (2006) *Las desigualdades multiplicadas*, Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Durán Migliardi, Carlos (2001) “Notas breves sobre la crisis y renovación de la izquierda chilena”, *Investigación y Crítica*, núm. 6, pp. 79-90.
- Elizondo, Carlos (2007) “Las lecciones de Chávez”, *Reforma*, 9 de febrero de 2007.
- Echemendy, Sebastián (2001) “Construir coaliciones reformistas: la política de las compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica”, *Desarrollo Económico*, vol. 40, núm. 160, pp. 675-305.
- Garretón, Manuel (2005) “Reflexiones en torno de la(s) izquierda(s) chilena(s) y el proyecto de país”, *Nueva Sociedad*, núm. 197.
- Gratius, Susanne (2006) “La ‘revolución’ de Hugo Chávez: ¿proyecto de izquierdas o populismo histórico?”, *Escenarios Alternativos*, año 3, núm. 39.
- Ibalbarriaga, Mercedes (2007) “Alcanza Bolivia auge económico”, *Reforma*, 22 de enero de 2007.
- Knoop, Joachim (2003) “Brasil con Lula ¿más de lo mismo?”, *Nueva Sociedad*, núm. 187.
- Latinobarómetro (2006) *Informe Latinobarómetro 2006*, Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro.
- Lechner, Norbert (1988) *Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política*, Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Orellana, Lorgio (2006) *Nacionalismo, populismo y régimen de acumulación en Bolivia. Hacia una caracterización del gobierno de Evo Morales*, La Paz: CEDLA.
- Pachano, Simón (2006) “Análisis de las elecciones en Ecuador. Explicaciones y matices”, *Infolatam*, 26 de noviembre de 2006.
- Reygadas Luis (2007) “Tres matrices generadoras de desigualdades”, en A. Ziccardi, R. Cordera y P. Ramírez, *Pobreza urbana y exclusión social en las ciudades del siglo XXI*, México: IIS-UNAM. (en prensa).
- Reygadas, Luis, Teresa Ramos y Guillermo Montoya (2007) “Los dilemas del desarrollo en la Selva Lacandona. Movimientos sociales, medio ambiente y territorio en dos comunidades de Chiapas”, en José Bengoa (ed.), *Territorios rurales. Movimientos sociales y desarrollo territorial rural en América Latina*, Santiago de Chile: Catalonia, pp. 200-236.
- Roberts, Kenneth (2003) “Social correlates of party system demise and populist resurgence in Venezuela”, *Latin American Politics and Society*, vol. 45, núm. 3, pp. 35-57.
- Rodríguez Garabito, César (2005) “La izquierda democrática en Colombia: orígenes, características y perspectivas”, en P. Barrett, C. Rodríguez Garabito y Daniel Chávez (eds.), *La nueva izquierda en América Latina: sus orígenes y trayectoria futura*, Buenos Aires: Norma.
- Rosales, Marcelo (2006) “A diez meses del gobierno progresista Uruguayo: ¿es sustentable un gobierno progresista?”, *Entre voces*, núm. 5, pp. 61-65.

- Saraví, Gonzalo (ed.) (2006) *De la pobreza a la exclusión. Continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina*, Buenos Aires-México: Prometeo-CIESAS.
- Schamis Hector (2002) *Reforming the State. The politics of privatization in Latin America and Europe*, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Stefanoni, Pablo (2006) “De la calle al palacio: los desafíos de la izquierda boliviana”, *Entre voces*, núm.5, pp. 69-72.
- Touraine, Alain (2006) “Entre Bachelet y Evo Morales, ¿existe una izquierda en América Latina”, *Envío Digital*, núm. 296, pp. 1-6.
- Villoro, Juan (2007) “Hacia una izquierda futura”, *Proceso*, núm. 1586, 25 de marzo de 2007, pp. 21-22.
- Weyland, Kurt (1996) *Democracy without equity. Failures of reform in Brazil*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Zibechi, Raúl (2005) “Le gauche uruguayenne: de l’hégémonie culturelle à l’hégémonie politique”, en *Alternatives Sud*, vol. 12, núm. 2, pp. 125-131.